

Publicado en: El Libro Blanco del Simposio Internacional: "Las políticas sociales ante los retos de la nueva sociedad". Valencia: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMERSO), 2004, pp. 25-36.

Ponencia I
"Los retos sociales del nuevo milenio"

Ponente:

Dr. Juan Díez Nicolás

Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
 ASEP

Desde el final de la II Guerra Mundial, hace aproximadamente cincuenta años, el mundo ha cambiado mucho más intensa y rápidamente de lo que lo había hecho en siglos anteriores. Este cambio acelerado se ha producido en los aspectos demográficos, en el uso de los recursos del medio ambiente y en el desarrollo tecnológico (especialmente en el ámbito de los transportes y las comunicaciones), por lo que no es extraño que haya cambiado también de forma extraordinaria en sus estructuras sociales y en sus sistemas de valores. Por primera vez en la historia de la Humanidad comienza a ser realidad la aparición de una sociedad globalizada, una sociedad interdependiente como no lo había sido nunca, pero al mismo tiempo, una sociedad global-mundial que presenta unas desigualdades sociales y económicas entre países y dentro de cada país que han sido crecientes desde la primera crisis del petróleo en 1973.

Las tendencias de cambio social son similares en todo el planeta, pero con puntos de partida y ritmos de cambio muy diferentes de unos países a otros, por lo que las situaciones en que se encuentran los distintos países en cualquier elemento de comparación son muy diferentes. La globalización parecía implicar la libre circulación de

personas, bienes y servicios, debido a los extraordinarios desarrollos en los medios de transporte y comunicación, pero mientras que se ha logrado con relativa facilidad la libre circulación de capitales, no ha ocurrido lo mismo respecto a la libre circulación de productos (bienes y servicios), ni la de personas. La globalización, por tanto, presenta aspectos positivos, pero otros muy negativos.

El envejecimiento demográfico, los movimientos migratorios, la integración social, la seguridad y la libertad, son procesos que de una u otra forma afectan a todos los países, pero de maneras muy diferentes y con consecuencias también muy diferentes. La cara más negativa de cualquiera de estos procesos es, ineludiblemente, el incremento de las desigualdades sociales. Hace cincuenta años se podía decir que un tercio de la población del mundo vivía en países desarrollados y dos tercios en países menos desarrollados. Hoy la distribución es de una quinta parte y cuatro quintas partes respectivamente.

Es comprensible que, ante esta situación, las Naciones Unidas hayan establecido los *Millenium Development Goals* (*Objetivos de Desarrollo para el Milenio*), que pueden

concretarse así:

- Erradicar la pobreza y el hambre extremos.
- Lograr una educación primaria universal.
- Promover la igualdad entre hombres y mujeres e incrementar el poder de la mujer.
- Reducir la mortalidad infantil.
- Mejorar la salud de las madres.
- Combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades.
- Asegurar un medio ambiente sostenible.
- Promover la cooperación global para el desarrollo.

Estos objetivos han sido concretados de manera muy específica en cada caso, de manera que se pueda evaluar fácilmente en qué medida se han cumplido en la fecha prevista, que ha sido establecida en el año 2015. Desde la perspectiva de los países desarrollados estos objetivos no sólo son alcanzables, sino que fueron alcanzados en su mayor parte hace ya muchos años, pero para cuatro quintas partes de la población mundial alcanzarlos será una tarea que requerirá esfuerzos improbables y desde luego una gran dosis de cooperación por parte de los países más desarrollados.

El reto más importante para este nuevo milenio, en consecuencia, es el de reducir las desigualdades sociales entre países y dentro de cada país. Ese debería ser el objetivo principal de todas las políticas sociales.

Hace treinta años, en 1973, se produjo la primera crisis del petróleo, que marcó un cambio muy significativo en lo que ha ocurrido en el mundo a partir de esa fecha. La crisis confirmaba los peores temores del conocido primer informe al Club de Roma, el informe *Meadows*, y cerraba una década, la de los años sesenta, llena de optimismo que prometía desarrollo económico en todo el mundo y por tiempo indefinido. Un gran número de investigaciones y estudios internacionales coincidían en un diagnóstico que puede resumirse así:

1. En primer lugar, un alto crecimiento demográfico desde el final de la II Guerra Mundial que no parecía que fuese a reducirse en el corto o medio plazo; 2. Este crecimiento de la población ejercía una presión creciente sobre el medio ambiente, no sólo por el incremento demográfico en sí mismo, sino por el incremento en el consumo de recursos *per capita*; 3. La creciente presión demográfica sobre el medio ambiente provocaría el agotamiento de ciertos recursos, encarecería la obtención de otros y degradaría el medio ambiente en general; 4. Al hacerse más escasos ciertos recursos, se produciría un cierto empeoramiento de la calidad de vida; 5. En esas condiciones, los que ocuparan posiciones de mayor poder social procurarían mantener su acceso a los recursos escasos, en detrimento de los que tuviesen menores cuotas de poder, lo que contribuiría a incrementar las desigualdades socio-económicas entre países y dentro de cada país; 6. El incremento de desigualdades conduciría a un incremento de los conflictos sociales, latentes o manifiestos, entre países y dentro de cada país; 7. El incremento de los conflictos provocaría situaciones de ingobernabilidad en el ámbito internacional y en el nacional, lo que podría conducir, finalmente, a que los poderes establecidos tuvieran la tentación de recurrir a respuestas autoritarias como medidas "más eficaces" para resolver esas situaciones conflictivas. Resulta no sólo sorprendente, sino en cierto modo también muy preocupante, comprobar hasta qué punto se han ido cumpliendo estas previsiones.

El crecimiento de la población ha sido ciertamente acelerado a lo largo de la historia de la Humanidad. Así, la población mundial, que puede estimarse en alrededor de 250 millones de habitantes a principios de la era cristiana, tardó dieciséis siglos y medio (1.650 años) en duplicarse, volvió a duplicarse en sólo 200 años, llegando a los 1.000 millones en 1850. En sólo 100 años la población mundial volvió a duplicarse, de forma que en 1950 había alcanzado ya los 2.000 millones de habitantes. Pero desde esa fecha el crecimiento demo-

gráfico fue aún más rápido y la población mundial se triplicó en cincuenta años, alcanzando la cifra de 6.000 millones de habitantes en el año 2000. El crecimiento demográfico ha reducido su ritmo desde entonces, pero sigue siendo un crecimiento muy alto, por lo que se supone que podrá duplicar la población mundial en alrededor de 60 años.

La presión de esta población mundial sobre los recursos ha sido tan intensa durante las últimas décadas del siglo XX que todas las advertencias sobre las posibles amenazas que se cernían sobre el medio ambiente se están cumpliendo incluso en mayor medida de lo previsto. La comparación de las evaluaciones sobre la situación del medio ambiente en el mundo realizadas en la conferencia de Estocolmo de 1972, en el informe Brundtland de 1987 y en las conferencias de Río de 1992, de Tokio en 1994 y de Johannesburgo en 2003 demuestran que la situación global no sólo no ha mejorado, sino que empeora de forma acelerada. La desaparición de especies vegetales y animales, el agotamiento de ciertos recursos no-orgánicos, el cambio climático, el agujero de ozono, la desertización, la escasez de agua, son algunos de los signos más visibles del deterioro ambiental. Las amenazas sobre el medio ambiente que la creciente industrialización en todo el mundo han producido son ahora reales, incluida la posibilidad de acabar con toda forma de vida sobre la Tierra.

Pero el cambio demográfico acelerado y su repercusión sobre el medio ambiente no son los únicos aspectos que fueron acertadamente pronosticados a finales de la década de los años setenta, sino que las consecuencias que de ellos se derivaban parecen haberse cumplido también. Así, aunque es evidente que se han producido grandes innovaciones tecnológicas y científicas que mayoritariamente podrían calificarse como beneficiosas y que constituyen mejoras indudables de nuestro nivel y estilo de vida, no cabe duda que en muchos aspectos sociales se ha producido un empeoramiento de la calidad de vida. Este empeora-

miento de la calidad de vida tiene su origen, en muchas ocasiones, precisamente en el hecho de que más y más gente tiene acceso a disfrutar de ciertos estilos de vida. En efecto, cuando ir a la playa en verano se generaliza se produce una masificación que, en última instancia, resta calidad a ese tipo de ocio; lo mismo puede afirmarse del tráfico durante los fines de semana, o de los desplazamientos para disfrutar del esquí, e incluso de la enseñanza y de cualquier tipo de actividad que requiera prestación de servicios. Todavía no hemos aprendido bien a incrementar la cantidad sin reducir la calidad. Es muy posible que los problemas derivados del cambio tan rápido a que se ve obligada la organización social para adaptarse a los retos de una población mundial que crece todavía a un muy alto ritmo y a un medio ambiente que está siendo esquilado y deteriorado también de forma acelerada, lleven a crear problemas de ingobernabilidad y desorganización social crecientes, de manera que, como ya anunció Hirsh hace treinta años, se alcancen los límites sociales al crecimiento antes incluso que los económicos.

Los hechos anteriormente descritos han provocado un incremento de las desigualdades socio-económicas entre países y dentro de cada país. Si se toma en cuenta el indicador económico por excelencia, la renta per capita, puede comprobarse que durante la década de los años 60, la Década del Desarrollo como fue denominada por las Naciones Unidas, las desigualdades entre países no aumentaron, pero a partir de la crisis del petróleo de 1973 las desigualdades han estado creciendo y a un ritmo acelerado. Así, la renta per capita de la región más rica del mundo en 1963 era 40 veces más alta que la de la región más pobre, y esa desigualdad se mantuvo prácticamente igual en 1973. Pero en 1983 esa "razón" entre la renta per capita de la región más rica y la más pobre era ya de 51 veces, de 91 en 1993, y de 103 veces en el año 2000. Los indicadores sobre diversos aspectos sociales y económicos que se publican anualmente por Naciones Unidas en su

Informe sobre Desarrollo Humano demuestran una creciente desigualdad entre países desarrollados y menos desarrollados en casi cualquier dimensión que se compare. Pero numerosos trabajos de investigación e informes más o menos oficiales demuestran igualmente, en gran cantidad de países, que las desigualdades en renta y en el acceso a determinados bienes y servicios están aumentando y no disminuyendo.

Pero lo más importante no es que las desigualdades sociales y económicas hayan aumentado y estén aumentando, lo que por otra parte está creando más rigidez y menos movilidad social, sino que los individuos en todas partes son cada vez más conscientes de ese aumento, debido entre otras razones a los medios de comunicación y al incremento incesante de las posibilidades que las nuevas tecnologías de la comunicación ofrecen a los individuos para interactuar entre sí. Como he podido señalar hace tiempo, en el mundo actual se ha producido una igualación en los "estándares de vida" subjetivos de clases sociales muy diferentes y de países con niveles de desarrollo muy distintos, pero subsisten grandes diferencias en sus "niveles de vida" objetivos, lo que provoca frustraciones individuales y colectivas al tomar en cuenta las grandes disparidades que, para los de inferior condición socio-económica, implican la comparación entre estándar y nivel de vida. Esa creciente toma de conciencia incide, precisamente, en el posible aumento de conflictos sociales, latentes o manifiestos.

No parece necesario presentar muchos argumentos para defender la afirmación, pronosticada ya hace más de tres décadas, de que el incremento de las desigualdades entre países y dentro de cada país crearía mayores y más frecuentes situaciones de conflicto, abierto o latente. En el ámbito internacional es cierto que desde la II Guerra Mundial no ha vuelto a producirse una guerra mundial de esa magnitud, pero no es menos cierto que han proliferado y siguen proliferando guerras "de alcance medio". Pero

también han proliferado los conflictos internos en los distintos países, desde la ya lejana revolución del 68 en los países occidentales a los numerosos conflictos que se han producido en repúblicas ex-soviéticas, revoluciones en países latinoamericanos y africanos, terrorismos nacionales, etc. No debe descartarse que entre las varias causas que explican el creciente terrorismo nacional e internacional haya que incluir la percepción de grandes desigualdades sociales y económicas. Cuando la proporción de la población mundial que vive en países menos desarrollados ha pasado de constituir dos terceras partes a ser en el momento actual cuatro quintas partes, y cuando la percepción de esa desigualdad es ahora mucho más visible, y sobre todo, cuando las poblaciones afectadas llegan a la conclusión (acertada o equivocada) de que no pueden ya tolerar esas desigualdades ni tampoco pueden cambiarlas mediante el diálogo político, no resulta difícil comprender (pero no justificar) que algunos decidan romper las reglas del juego social y se lancen a cambiar la realidad de forma violenta.

La historia de la Humanidad ha seguido una larga trayectoria partiendo de un gran número de comunidades humanas independientes que, mediante el desarrollo tecnológico y la creciente complejidad de sus organizaciones sociales, han ido agrupándose para formar nuevas estructuras comunitarias de mayor tamaño, de creciente diferenciación interna y creciente especialización externa, y por supuesto, cada vez más interdependientes entre sí. El proceso de globalización actual, que en realidad ha estado produciéndose desde que el ser humano apareció sobre la Tierra, y que no es sino consecuencia del continuado desarrollo de los medios de transporte y comunicación, conduce hacia el último estadio en el proceso de expansión de los sistemas sociales, que eventualmente culminará en la formación de una sola comunidad global mundial que todavía está, sin embargo, muy lejos.

Puede decirse, por tanto, que muchos de los retos que tiene

el mundo en la actualidad son una continuación, en cierto modo agravada, de los que se plantearon ya hace treinta años. Hay algunos retos, que no son necesariamente problemas salvo que nos empeñemos en convertirlos en tales, que se derivan del diagnóstico anterior. En primer lugar, hay dos retos que se derivan del cambio demográfico: el envejecimiento de la población y los movimientos migratorios.

Respecto al envejecimiento de la población, diré lo que suelo decir cuando alguien habla del "problema" del envejecimiento, que su solución es muy sencilla, todo consiste en aumentar la mortalidad, pero no conozco a nadie que esté dispuesto a enarbolar esa bandera. No entiendo que se pueda denominar problema a lo que ha sido uno de los mayores éxitos de la Humanidad, el aumento en la esperanza de vida, que ha sido espectacular, pues desde principios del siglo XX se ha duplicado en los países más desarrollados, pero el incremento en los países menos desarrollados ha sido también espectacular, hasta el punto de que no hay un solo país en el mundo que tenga una esperanza de vida inferior a la que tenía España en 1900, que no era precisamente un país subdesarrollado en esas fechas.

En cuanto al envejecimiento previsto de la población española, es cierto que un informe reciente de las Naciones Unidas señala que España es el séptimo país en el mundo según la proporción de su población con 60 y más años. Los países más envejecidos actualmente son Italia y Grecia, seguidos de Alemania, Japón, Suecia, Bélgica y España, y el país más envejecido dentro de 50 años será España (43 por ciento de su población tendrá 60 y más años) suponiendo que se mantengan constantes las actuales tendencias de natalidad y mortalidad.

Hay dos retos que se derivan del cambio demográfico: el envejecimiento de la población y los movimientos migratorios.

Evidentemente se trata de un gran cambio en la estructura de la población, pero un cambio que afectará a todas las poblaciones europeas, a medio plazo, y a las poblaciones del resto del mundo después, debido a la reducción de la fecundidad y al incremento en la esperanza de vida en todas partes. En efecto, la proporción de población con 60 y más años en 2050 en el conjunto europeo será, según esas mismas estimaciones, del 35 por ciento, con pequeñas variaciones entre el Norte y el Sur de Europa. Pero es que la proporción de población de 60 y más años en el conjunto de la población mundial será del 22 por ciento, es decir, la misma proporción que se observa actualmente en España. Puesto que el envejecimiento de la población va a ser muy similar en todos los países europeos, el caso español no representa nada atípico ni excepcional, aunque debido a

que las proyecciones se basan en las actuales tasas de fecundidad y mortalidad, cualquier pequeña variación en éstas posiblemente repercutiría en que España no sea necesariamente el país más envejecido, sino que ese lugar pueda ocuparlo cualquier otro país

europeo.

En consecuencia, y puesto que las únicas formas de evitar ese envejecimiento serían aumentar la mortalidad (solución que, insisto, nadie en su sano juicio puede defender), aumentar la fecundidad (solución que, en mi opinión, no es necesariamente deseable, pero sobre todo no es previsible, al menos en la cuantía en que ese incremento debería producirse para reducir el envejecimiento de la población española), o aumentar la inmigración (solución que, para ser efectiva en la reducción del envejecimiento, debería ser de una cuantía anual extraordinaria y sostenida durante muchos años), parece que lo más lógico es comenzar a pensar en los cambios que se requieren en las estructuras sociales para acomodarse a ese inevitable (y, en mi opinión,

no necesariamente indeseable) cambio en las estructuras demográficas de las sociedades futuras. En efecto, personalmente pienso que es bueno, y no malo, que la mayor parte de los que nacen sobreviva hasta edades cercanas a los 100 años, que por el momento parece seguir siendo el techo de la vida humana, aunque existen fundadas esperanzas de que ese techo se romperá pronto. El envejecimiento de la población no debe considerarse como un "problema social", sino como un gran logro de las sociedades actuales. Por otra parte, todas las investigaciones conocidas, en España y en otros países, demuestran que el cambio que se ha producido no sólo implica que la proporción de los integrantes de cada cohorte que llega a los 65 o a los 80 años es cada vez mayor, sino que llega en mejores condiciones físicas y mentales. Lo importante no es que la esperanza de vida media al nacer en España sea actualmente de 82 años para las mujeres (una de las más altas del mundo) y 74 años para los hombres, sino que las personas que llegan ahora a esas edades tienen muy buena salud física y mental. No es exagerado afirmar que el estado físico y mental de una persona de 75 años en la actualidad es similar (incluso mejor) que el de una persona de 65 años hace sólo 30 ó 40 años.

Consecuentemente con todos estos hechos, creo que ha llegado el momento de reconocer que no se pueden seguir utilizando las divisiones de edad tradicionales, teniendo en cuenta que se ha más que duplicado la esperanza de vida media al nacer. En efecto, cuando la esperanza de vida media en España, a principios del siglo XX, era de 35-40 años, se consideraba jóvenes a los menores de 15 años, y mayores a los que sobrepasaban los 65 años. Aplicar esas mismas divisorias a la población actual es un despropósito, debido a que la esperanza de vida ahora es de alrededor de 80 años y a que la emancipación de los jóvenes se produce alrededor de los 30 años. Por ello, parecería más lógico considerar jóvenes a los menores de 25 años, y mayores a los que sobrepasan los 75 años. Y, por tanto, habría que retrasar la

edad de jubilación, al menos voluntariamente, hasta los 75 años. En realidad, y teniendo en cuenta que la jubilación ha sido un derecho conquistado por los trabajadores (y no un castigo que se les ha impuesto), no se entiende muy bien que ese derecho haya pasado a convertirse en obligación, como es la jubilación actual. El actual ciclo de la vida aconsejaría, más bien, aceptar la jubilación siempre como algo voluntario, y sólo como obligatoria en caso de incapacidad física o mental para desarrollar un determinado tipo de trabajo. Aunque la legislación española actual ya contempla la jubilación voluntaria en el sector privado, todavía no lo ha hecho en el público, lo cual, además de significar una discriminación basada en la edad, constituye un agravio comparativo difícilmente justificable. Además, la pensión de jubilación se debería calcular siempre de forma proporcional al total de años que se haya cotizado a la Seguridad Social (aunque debe haber un mínimo garantizado a todos, como ahora sucede con las pensiones no contributivas). Lo que resulta de todo punto inimaginable es que la sociedad española del año 2050 esté pagando pensiones de jubilación a un 43 por ciento de la población, que serían los mayores de 60 años. Pero sí es perfectamente imaginable que esté pagando pensión de jubilación a un 18-20 por ciento de la población, que serían los mayores de 75 años, que es más o menos lo que resultaría de la previsión antes citada de las Naciones Unidas. Ha llegado el momento de aceptar que el envejecimiento de la población, la española y la de los países más desarrollados primero, pero después la de todos los demás, va a producirse inevitablemente en las próximas décadas, debido a dos cambios deseables: la reducción de la mortalidad y el incremento de la esperanza de vida hasta cerca de los 100 años, y la reducción de la fecundidad para frenar el excesivo y agobiante crecimiento de la población mundial. El único modo de mantener la actual distribución proporcional de la población por edades, sin reducir la esperanza de vida, no puede ser otro que el de casi duplicar la actual tasa de fecundidad, y por tiempo indefinido, pues en cuanto disminuyese la fecundidad

volvería a producirse un incremento de la proporción de personas mayores. Y ese incremento de la fecundidad, con independencia de que se considere deseable o no, no parece que vaya a producirse en las próximas décadas.

Por ello, lo que hay que debatir no es como evitar lo que es una consecuencia inevitable de nuestros propios deseos, sino como acomodar la sociedad a esa nueva realidad. Y ello comporta comenzar ya a cambiar la idea de que a los mayores de 65 años hay que "aparcarlos" de la mejor forma posible para que esperen plácidamente a que les llegue la muerte, espera que puede durar ahora 20 años, o incluso más, desde la jubilación o la "pre-jubilación" (o el paro indefinido para muchos de los mayores de 55 años). Lo que hay que hacer es comenzar a cambiar las estructuras sociales para que los individuos sean ciudadanos de pleno derecho sin sufrir discriminación a causa de la edad (y ello implica tener una ocupación mientras su estado físico y mental lo permita), y puedan decidir por sí mismos cuando y

cómo desean pasar a formar parte de las denominadas "clases pasivas". Si se ha aceptado el retraso de la juventud a causa del más largo período de formación que requieren las sociedades actuales, habrá que aceptar también el retraso de la jubilación para adaptarse a la mayor esperanza de vida y a las mejores condiciones de salud de la población mayor. Concretamente, hace sólo unas décadas la vida laboral de un individuo era de alrededor de 40 años, pues comenzaba a los 20 años y terminaba más o menos a los 60 años. Como la esperanza de vida era de 60 años, ello significaba que como promedio un individuo pasaba dos tercios de su vida sin depender de nadie más que de sí mismo, y sólo un tercio de su vida dependía de otros (generalmente la familia) para sobrevivir, puesto que sólo una reducida proporción de la

población sobrepasaba la edad de jubilación y cobraba una pensión. En la actualidad, los jóvenes se incorporan a la vida laboral como promedio a los treinta años, y la pre-jubilación, la jubilación o el paro de larga duración comienza como promedio a los 55 años, de manera que, teniendo en cuenta que la esperanza de vida es ahora de 80 años, ello implica que se han invertido los términos, pues el individuo se auto-mantiene durante un tercio de su vida, pero depende de los demás durante dos tercios de su vida.

Finalmente, debe indicarse que si se siguiesen los consejos de quienes piden un incremento de la fecundidad para contrarrestar el progresivo envejecimiento de la población

Si se ha aceptado el retraso de la juventud a causa del más largo período de formación que requieren las sociedades actuales, habrá que aceptar también el retraso de la jubilación para adaptarse a la mayor esperanza de vida y a las mejores condiciones de salud de la población mayor.

española, probablemente se provocarían otros problemas más graves y, al final, no se evitaría el envejecimiento demográfico. En efecto, si durante los próximos años se incrementase significativamente la fecundidad, durante esos próximos años la población española continuaría teniendo una alta proporción de mayores de 65

años (debido al mantenimiento de una alta esperanza de vida) y aumentaría significativamente también la proporción de los jóvenes, de manera que el peso que soportaría la población adulta en edad de trabajar sería muy superior al que se quiere evitar, pues no se reduciría la población dependiente mayor y aumentaría la población dependiente joven. Este período de mayor dependencia duraría, probablemente, durante los próximos 50 años. Pero, a partir de ese momento, la fecundidad tendría que mantenerse en ese nivel alto indefinidamente (e incluso aumentar), pues en cuanto disminuyese, la población estaría nuevamente en la situación actual, pues no debe descartarse que la esperanza de vida siga aumentando, aunque sea levemente, durante las próximas décadas. En realidad, la única forma

de reducir el envejecimiento de la población sin tener que aumentar la fecundidad sería aumentar la mortalidad de los mayores, y como he repetido una y otra vez, no creo que nadie en su sano juicio quiera proponer esa solución.

Las sociedades desarrolladas actuales tienen que aceptar que durante unas décadas se producirá un cierto desequilibrio en la distribución por edades de su población, pero pasado ese período, la distribución volverá a una situación muy similar a la actual, pero con una sostenida baja fecundidad y muy alta esperanza de vida al nacer, y lógicamente con un crecimiento demográfico casi cero o incluso negativo. Además, si se acepta socialmente que la juventud se retrasa hasta los 25-30 años, y que la vejez se retrasa hasta los 75-80 años, la comparación real entre la distribución de la población española en los años ochenta y la del 2050 resultará muy similar, pues en ambos casos la población en edad de trabajar (30-75 años) será de entre 55-65 por ciento, como ha sido habitual en la población española, y además con una muy superior participación real de la mujer en la población activa. En cualquier caso, los que defienden reducir el impacto social del envejecimiento (sobre todo los supuestos efectos sobre las pensiones de jubilación) mediante un incremento de la fecundidad deberían tener en cuenta que los hechos demográficos tienen muchas relaciones recíprocas entre sí y con efectos que perduran en la población durante muchas décadas.

El otro gran reto que plantea el cambio demográfico es el de las migraciones internacionales. Las migraciones internacionales constituyen una de las cuestiones centrales entre las preocupaciones de todos los gobiernos y, en consecuencia, de las organizaciones internacionales, por la significativa y doble relación de causa y efecto entre estos movimientos de población y el desarrollo, y por las importantes consecuencias que los movimientos de población tienen para los territorios de origen y los de destino. El continuado desarrollo de los transportes, y en

especial la mayor accesibilidad de unas áreas del mundo a otras debido al abaratamiento de sus costes, la creciente desigualdad entre países desarrollados y menos desarrollados, así como el crecimiento demográfico muy bajo o casi nulo en los primeros, mientras que continúa siendo alto en los segundos, son los principales factores que explican el creciente volumen de los movimientos de población en el mundo, movimientos que, con muy escasas excepciones, se producen desde los países menos desarrollados a los más desarrollados.

El crecimiento de la población es el resultado de dos componentes, el crecimiento vegetativo o natural y el saldo migratorio, cada uno de los cuales es a su vez el resultado de dos componentes, la diferencia entre nacimientos y defunciones, en el primer caso, y la diferencia entre inmigrantes y emigrantes en el segundo. Por supuesto, el crecimiento total puede ser positivo o negativo, pero ese crecimiento total positivo o negativo puede resultar de muy diversas combinaciones según cual sea el signo (positivo o negativo) de cada uno de sus dos componentes, vegetativo y migratorio.

Tradicionalmente, la mayoría de los países europeos han tenido un crecimiento total positivo y un crecimiento natural también positivo, que era generalmente mayor que el saldo migratorio (con independencia de que éste fuese positivo o negativo), pero actualmente los países más desarrollados suelen mostrar un crecimiento total casi cero, cero o incluso negativo, con un crecimiento natural muy pequeño (positivo o negativo) generalmente inferior al saldo migratorio, que suele ser positivo.

En realidad, si la fecundidad continúa en un nivel tan bajo como en la actualidad, inferior al nivel de reemplazo en todos los países de la Unión Europea es previsible que el crecimiento demográfico de estos países proceda principalmente del saldo migratorio positivo, es decir, de la inmigración desde los países menos desarrollados. Como

se ha indicado, el saldo migratorio es ya positivo en los quince países, pero es que es el principal componente del crecimiento total en diez países y responsable de que el crecimiento total negativo provocado por un fuerte crecimiento vegetativo negativo no lo sea aún más en otro.

Si a estas diferencias de crecimiento vegetativo o natural, se añade el hecho de que la población de la Unión Europea representa sólo el 6 por ciento de la población mundial, y que la población de los países menos desarrollados representa el 80 por ciento de la población mundial, con una renta per capita que es dieciséis veces más baja que la de los países desarrollados, se llega a la conclusión de que lo realmente extraño es que los flujos migratorios internacionales no sean mucho más intensos de lo que lo son en la actualidad.

La importancia de los movimientos migratorios es tan grande que, mientras en 1976 sólo un 13 por ciento de los países del mundo declararon tener políticas relativas a dichas migraciones, en 1995 más del 40 por ciento de los gobiernos han declarado tener políticas relativas a las migraciones internacionales (Naciones Unidas, 1997). El Programa de Acción aprobado en la Conferencia de El Cairo en 1994 dedica todo un capítulo a las migraciones y, aún reconociendo que las migraciones han contribuido al desarrollo tanto en los países de origen como en los de destino, puso el énfasis en la conveniencia de que unos y otros países favorezcan la permanencia de las poblaciones en sus propios países de origen, favoreciendo las migraciones temporales sobre las más permanentes y favoreciendo la migración de retorno a los países de origen.

No parece necesario aclarar que el mismo número de personas desplazándose de un país a otro tiene un peso relativo muy diferente respecto a la población de cada uno de los dos países, o que el peso relativo del saldo migratorio neto respecto al crecimiento demográfico total de un país

dependerá del mayor o menor crecimiento que tenga. En un reciente informe de Naciones Unidas se afirma que los países occidentales con economía de mercado absorbieron una migración neta de 35 millones de personas, que representó el 28 por ciento del crecimiento total de su población. En cambio, la pérdida de esos 35 millones de migrantes redujo en menos del 2 por ciento el crecimiento de la población en el resto del mundo.

Por eso, aunque Asia o América Latina tienen tasas de crecimiento demográfico diez veces superiores a la de Europa (que está casi en el crecimiento cero), sus saldos migratorios netos, que en términos absolutos son muy grandes y negativos, en términos relativos sólo representan el 0,4 y el 1,2 por ciento, respectivamente, de su crecimiento total. Pero en Europa, que tiene un crecimiento positivo, pero muy pequeño, el saldo migratorio representa nada menos que el 88 por ciento de su crecimiento total. En otras palabras, el crecimiento demográfico de Europa se debe casi en su totalidad, como se ha indicado anteriormente, a la inmigración, y no a su crecimiento natural o vegetativo, es decir, a la diferencia entre nacimientos y defunciones.

Los desequilibrios demográficos y económicos entre unos países y otros, el aumento del paro y de las desigualdades sociales que se ha experimentado en todo el mundo desde comienzos de los años noventa, han hecho aumentar exponencialmente las migraciones internacionales.

Si en 1965 el número de personas que vivían en un país diferente al de nacimiento fue de 75 millones, en 1990 pasó a ser 130 millones, y en 2000 ha superado los 150 millones. El número de refugiados ha aumentado desde menos de 2 millones en 1965 a más de 15 millones en la actualidad. Como consecuencia de ello, todos los países, y especialmente (pero no exclusivamente) los más desarrollados, han adoptado medidas más estrictas para regular la aceptación

de inmigrantes internacionales.

España, como otros países de Europa, ha pasado en muy poco tiempo de ser un país de emigración a ser un país de inmigración. Hasta 1990 nuestro saldo migratorio neto fue negativo, pero desde 1991 y sin interrupción, el saldo migratorio neto ha sido positivo, hasta el punto de que el saldo migratorio representa más del 90 por ciento del crecimiento demográfico total en España, mientras que el crecimiento vegetativo sólo contribuye con un 10 por ciento. No obstante, España es, de acuerdo con todos los datos nacionales e internacionales habitualmente utilizados, el país de la Unión Europea con menor proporción de inmigrantes, que sólo ahora se aproxima al 3 por ciento sobre la población española total. Por supuesto, aunque la proporción de la población extranjera seguirá aumentando en los próximos 15 años, resulta muy improbable que pueda alcanzar el 25 ó 30 por ciento que algunos pronostican para España, teniendo en cuenta que en ningún país europeo supera el 15 por ciento en la actualidad. No obstante, y de forma particularmente acusada a lo largo de los últimos años, se han producido en España hechos aislados de xenofobia o racismo, que han alertado a la opinión pública sobre la posible aparición de actitudes más generalizadas en el futuro. En este sentido, han sido particularmente violentos, y por tanto muy preocupantes, los brotes de violencia racista que se produjeron en el verano de 1999 en las provincias de Tarragona y Murcia, pero sobre todo los que se produjeron en El Ejido (Almería) en febrero del año 2000, y algunos otros en esa misma provincia y en la vecina de Murcia, además de otros en diferentes lugares de España a lo largo de este mismo año.

Aún así, estos hechos siguen siendo minoritarios y afortunadamente muy condenados por la opinión pública española, por los medios de comunicación y por las instituciones en general. No obstante, y reconociendo la gravedad de estos hechos y otros acaecidos en años

anteriores y posteriores, es de justicia también subrayar que la notoriedad adquirida por ellos es fruto, precisamente, de su carácter esporádico y excepcional, y que la inmensa mayoría de la población en los lugares señalados son los primeros en demostrar, a través de manifestaciones públicas y otras comunicaciones a la opinión pública, su total repulsa y condena a los que provocan y fomentan esos incidentes lamentables. Varios años después de producidos se sigue hablando de los acontecimientos de El Ejido, precisamente porque no ha habido otros nuevos que, al superarlos, los hayan hecho olvidar. La actitud de todos los partidos políticos importantes, de los medios de comunicación y en general de los líderes sociales de opinión, con toda seguridad han influido decisivamente en impedir (o al menos obstaculizar) que las actitudes xenófobas o racistas reciban el más mínimo respaldo social, lo cual no significa que éstas no existan, pero sí significa que la gente sabe que son actitudes que "no están bien vistas". Esta presión social negativa respecto a las actitudes racistas y xenófobas hace cada vez más difícil, a su vez, su detección mediante la investigación social, ya que los individuos tienden a ocultarlas al entrevistador, lo que obliga a desarrollar técnicas más sofisticadas de investigación.

Sobre las migraciones se siguen haciendo toda clase de afirmaciones poco respaldadas por los hechos. Ya se ha indicado antes que algunos piensan que la inmigración rejuvenecerá la estructura de la población española, lo cual es una verdad parcial, pues debido a la juventud de los inmigrantes, contribuyen, aunque solo en forma muy leve, a engrosar los grupos de edad de jóvenes adultos. Pero los inmigrantes también envejecen, y por tanto, dentro de algunos años también engrosarán las filas de quienes tienen derecho a pensión de jubilación, lo que exigiría un continuo y creciente flujo de inmigrantes para que sus cotizaciones pagaran las pensiones de una creciente población jubilada. Además, la salida de inmigrantes jóvenes provocaría envejecimiento demográfico en las poblaciones de origen.

Por tanto, ni el incremento de la fecundidad, ni las migraciones, van a impedir el envejecimiento de las poblaciones desarrolladas, pues para que lo hicieran tendrían que aumentar de forma indefinida, y ello crearía un problema aún más grave, un crecimiento explosivo de la población, aparte del envejecimiento demográfico en los países de emigración. Y si la fecundidad y las migraciones no aumentan indefinidamente, su pretendida solución sería sólo temporal. Por tanto, la única solución viable (descartada también la del incremento de la mortalidad) es la de cambiar la organización social para aceptar esta situación, lo que significa aceptar el mantener a la población en situación de activa todo el tiempo que sea posible, pero las políticas actuales en uso continúan "expulsando" a la gente a edades cada vez más tempranas de sus trabajos. La prejubilación y el paro de larga duración, que ahora son frecuentes a partir de los 50 años, es el mayor despropósito de nuestra actual civilización, puesto que reduce los costes de las empresas, pero a costa de incrementar los gastos sociales del Estado, es decir, de todos los contribuyentes, y lo que es más importante, a costa de la auto-estima de los afectados, que se encuentran con un período que puede llegar a ser incluso de 40 años de inactividad laboral.

Relacionado con la inmigración se encuentra el reto de la integración social. Los flujos migratorios están produciendo en todo el mundo una mezcla de razas, nacionalidades, lenguas, religiones y culturas hasta ahora nunca experimentadas por la Humanidad. **La diversidad cultural y no la homogeneidad caracterizan y caracterizarán de forma creciente a todas las sociedades en el futuro inmediato. Esa es otra característica de la globalización.** Ello requiere tolerancia y respeto, conceptos que no tienen por qué conducir al sincretismo. Medidas para impedir el ejercicio de la libertad de exhibir símbolos religiosos, lejos de resolver los posibles conflictos y enfrentamientos entre culturas diferentes, lo que muy probablemente provocarán es precisamente mayores conflictos entre culturas diferentes.

Personalmente creemos que la legalidad vigente en el país receptor (siempre y cuando no contradiga la legalidad y los usos internacionales) debe ser el único criterio para aceptar o rechazar ciertas manifestaciones culturales. Si algo están demostrando las recientes investigaciones sobre valores sociales es precisamente que las poblaciones de todo el mundo, pero de manera especial las de los países europeos post-industriales, es que se abandonan los antiguos valores tradicionales y de supervivencia propios de sociedades caracterizadas por la escasez, en las que la mayoría de la población no tenía suficientemente garantizada su seguridad económica y personal, por un nuevo sistema de valores secular-racionales y de auto-expresión y emancipación. Los individuos en estos países, entre los que se encuentra España, reclaman de forma creciente la posibilidad de elegir y decidir por sí mismos. La gente quiere tener el derecho a formar y a romper parejas, a tener o no tener hijos, a practicar o no practicar la religión que desee, a votar a sus gobiernos, a elegir entre las numerosas ofertas del consumo. Esta nueva orientación debería facilitar el respeto y la tolerancia hacia los demás, y en gran medida así es para la mayoría de la población española, aunque existen grupos sociales que hacen de la intolerancia y la exclusión su bandera. La integración social exige tolerancia y respeto mutuos. España, hasta la fecha, puede ser legítimamente considerada como uno de los países europeos con un grado más bajo de racismo y xenofobia, como avalan no solo diversas investigaciones nacionales sino también internacionales, incluidas las del propio Centro de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia de la Unión Europea con sede en Viena. Aunque, como he dicho en repetidas ocasiones, cualquier grado de racismo y xenofobia, por pequeño que sea, es demasiado.

No es posible finalizar esta breve introducción a estas jornadas, en las que se examinarán en detalle todas estas cuestiones, sin hacer una referencia, por breve que sea, a otros retos a los que deberán enfrentarse nuestras socie-

dades en el futuro, a veces incluso ya en el presente.

En primer lugar, hay que referirse a la eterna confrontación entre seguridad y libertad. Recientemente se está asistiendo a un incremento de la violencia en todo el mundo, la violencia terrorista y otras formas de violencia que suponen amenazas muy graves e innegables a la seguridad, pero también a la libertad. La seguridad, según demuestran los estudios de valores antes aludidos, es uno de los valores más importantes para las poblaciones en todo el mundo, y ello ha conducido a respuestas muy diversas para garantizarla. En algunos casos se combate a la violencia y la inseguridad desde la legalidad que representan las fuerzas de seguridad y los jueces, sin recurrir a métodos generalmente considerados ilegales por las legislaciones nacionales e internacionales. Pero en otros se pretende combatir a la violencia y a las amenazas a la seguridad a través de métodos ilegales y, lo que es peor, con medidas que recortan gravemente las libertades que han costado siglos de desarrollo cultural a las sociedades más desarrolladas, y de manera muy particular a las denominadas "europeas o europeizadas". Buscar el equilibrio entre seguridad y libertad no es un problema de fácil solución. Pero buscar la seguridad por métodos ilegales y con recortes de las libertades civiles puede ser tan peligroso como la amenaza que la violencia supone para la seguridad y la libertad de los ciudadanos. De esa manera, los practicantes y los defensores de la violencia amenazan doblemente el ejercicio de las libertades por parte de los ciudadanos, por las amenazas que ponen en peligro su seguridad, y por la reacción que estas amenazas a la seguridad pueden provocar en los gobiernos para recortar las libertades.

Buscar el equilibrio entre seguridad y libertad no es un problema de fácil solución. Pero buscar la seguridad por métodos ilegales y con recortes de las libertades civiles puede ser tan peligroso como la amenaza que la violencia supone para la seguridad y la libertad de los ciudadanos.

Un segundo reto es el que se refiere a la corrupción. No es preciso insistir en que, junto al crecimiento mundial del crimen organizado, especialmente el tráfico de droga, de armas y de personas, se ha generalizado la corrupción en gran escala. La corrupción posiblemente ha existido y existe en mayor o menor medida en todas las sociedades, pero es evidente que en la actualidad está afectando de manera muy directa a personas que se encuentran que ocupan posiciones de alta responsabilidad en el sector privado y en el público.

El tercer reto al que debe hacerse referencia, relacionado con el anterior, es el relativo a la necesidad de impedir el deterioro que con creciente frecuencia e intensidad se observa en el funcionamiento de los dos sistemas que más fundamentalmente definen a nuestras sociedades: la economía de libre mercado y la democracia parlamentaria. Respecto al primero, se señala la falta de transparencia del mercado, la existencia de monopolios más o menos encubiertos, y la opacidad de funcionamiento de los grandes grupos financieros del mundo. Respecto al segundo, debe recordarse que las democracias se caracterizan (o deben caracterizarse) no sólo por la legitimidad y representatividad de sus parlamentarios, sino también, y muy principalmente, por la rendición de cuentas ante quienes les han puesto en sus cargos, que no son los partidos políticos, sino los electores.

Por supuesto hay muchos otros retos, pero no se puede hacer de esta intervención introductoria una enciclopedia de todos los retos sociales para las sociedades en el futuro.